



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20201030016791 - OAJ

Fecha: 14-04-2020 11:43

Bogotá D.C.,

Señora

ANA ESPERANZA LATORRE HURTADO

Correo electrónico: juridica.col@yahoo.com

Asunto: Respuesta a radicado No. 20208000496572

Respetada señora Ana Esperanza:

Mediante el radicado del asunto el 3/04/2020 acusamos recibo de su comunicación dirigida a varias entidades en la que manifiesta: “(...)

1. ¿Cómo garantizan el uso del presupuesto que le es asignado a las EPS, si la SUPERSALUD interviene administrativamente a MEDIMAS?
2. ¿Qué protección tienen aquellos usuarios con enfermedades permanentes, que dependen de los medicamentos que les suministra MEDIMAS EPS?
3. ¿Si con la intervención se ha visto afectada la autonomía del presupuesto, que sucede con los recursos que aun no han sido usados?
4. ¿Cómo fundamentan el uso o no uso de dichos recursos, si ya no es por medio de la razón social de MEDIMAS EPS?
5. ¿Ante quién se solicita el no traslado de usuarios de MEDIMAS EPS, a otras entidades de salud?
6. ¿Qué garantiza que la redistribución de los afiliados de MEDIMAS entre las otras EPS significara un MEJOR acceso al servicio público de la seguridad social en salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna a los afiliados?
7. ¿Cómo garantizan que la decisión no genere RIEZGO SISTEMICO EN SALUD que afecte las otras entidades promotoras de salud (EPS), los usuarios o afiliados de MEDIMAS y las otra EPS, los prestadores de servicio de salud (IPS) exclusivos y no exclusivos de MEDIMAS y de los trabajadores directos e indirectos de MEDIMAS EPS?



(...)"

Por lo anterior de manera atenta nos permitimos comunicarle lo siguiente:

COMPETENCIA DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Conforme a lo establecido por el Decreto Ley 4085 de 2011^[1], modificado en lo pertinente por el decreto 2269 de 2019, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tiene como objeto “el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; la formulación, evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación”.

En línea con lo anterior, con respecto a las funciones y la competencia con la que cuenta la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado previstos en el Decreto Ley 4085 de 2011, modificado parcialmente por el artículo 1° del Decreto 915 de 2017^[2] y el Decreto 2269 de 2019^[3], en especial las que hacen referencia a sus objetivos y funciones, se encuentran definidas y limitadas en cuanto a los sujetos destinatarios de su actividad, únicamente a entidades públicas del orden nacional y en el contenido de sus funciones, a cuatro grandes áreas de intervención como se señala a continuación:

1. El diseño de las políticas de prevención de daño antijurídico y de defensa.
2. La coordinación de la defensa jurídica de Entidades del orden Nacional.
3. El ejercicio de la representación judicial a nivel nacional e internacional; y
4. La gestión del conocimiento y evaluación de la defensa jurídica del Estado.

De otra parte, el numeral 20 del artículo 10 mismo del Decreto 2269 de 2019 que modificó el artículo 18 del Decreto Ley 4085 de 2011 prevé el marco de asistencia o asesoría legal, así:

“20. Brindar asistencia o asesoramiento legal a las entidades públicas de orden nacional como parte de la prevención del daño antijuridico, mediante acompañamiento conceptos.”

Ahora bien, en relación con las funciones a cargo de la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia, el numeral 6 del artículo 15 ibidem, dispone:

“Artículo 15. Oficina Asesora Jurídica. Serán funciones de la Oficina Asesora Jurídica las siguientes:

(...)



6. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia y de la Agencia".

De acuerdo con las disposiciones transcritas, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, no tiene competencia para intervenir ante otras entidades para obtener el cumplimiento de asuntos a su cargo, ni para brindar asesorías que no estén contempladas dentro de sus funciones.

Ahora bien, si bien se observa que remitió su comunicación a las entidades competentes para dar respuesta, se observó que no la dirigió al correo electrónico del Ministerio de Salud y Protección Social; razón por la cual que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, su solicitud será remitida a dicha cartera ministerial, para que proceda según lo que corresponda, mediante el oficio que se anexa a la presente.



[1] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”.

[2] “Por el cual se modifica parcialmente las funciones y estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”.

[3] “Por el cual se modifica parcialmente las funciones y estructura de la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”

Cordialmente,

Firmado Electronicamente por:

CLARA NAME BAYONA

No. Radicado: 20201030016791

Dependencia: OFICINA ASESORA JURIDICA - Jefe

Copia: Lo enunciado

Preparó: Margarita María Miranda Hernández, abogada OAJ